



AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1274/2002
QUEJOSA: TRITURADOS BASÁLTICOS Y
DERIVADOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE.

PONENTE: MINISTRO JOSÉ VICENTE AGUINACO ALEMÁN.
SECRETARIA: CONSTANZA TORT SAN ROMÁN.

Vo.Bo.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día
veintiuno de febrero de dos mil tres.

VISTOS; Y
RESULTANDO:

COTEJÓ:

PRIMERO. Por escrito presentado el once de abril de dos mil
dos, en la Oficialía de Partes Común a la Sala 39 Civil-Familiar del
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, "Triturados
Basálticos y Derivados", sociedad anónima de capital variable, por
conducto de su apoderado, Carlos Alberto Ramos Vega, interpuso
demanda de amparo directo contra las siguientes autoridades y actos
reclamados:

"III. AUTORIDAD RESPONSABLE. La Segunda Sala
Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito
Federal que la integraron los Magistrados que dictaron
en forma colegiada el acto reclamado, que fueron:
Víctor Rolando Díaz Ortiz, Rubén Loredó Abdalá y
Joaquín Madrigal Valdez, siendo ponente el último de



los nombrados.--- IV. ACTO RECLAMADO. La sentencia definitiva de 14 de marzo de 2002, por virtud de la cual se resolvió en el toca 581/2002 el recurso de apelación interpuesto por la demandada Triturados Basálticos, en contra de la sentencia de primer grado de 14 de enero pasado, dictada por el Juez Trigésimo Cuarto de lo Civil del Distrito Federal en el expediente 414/2001."

SEGUNDO. La parte quejosa invocó como violados en su perjuicio los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; señaló como tercera perjudicada a la empresa denominada "Maquinaria Diesel", sociedad anónima de capital variable, y narró los siguientes antecedentes:

"Bajo protesta de decir verdad manifiesto que los hechos que constan a mi mandante y que constituyen los antecedentes de los actos reclamados y que sirven de fundamento a los conceptos de violación, son los que a continuación se narran:--- 1. El día 21 de junio de 2001, Maquinaria Diesel, S.A. de C.V., demandó en la vía ejecutiva mercantil, a Triturados Basálticos las siguientes prestaciones:--- 'a) El pago de la cantidad de

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

o su equivalente en moneda nacional, al tipo de cambio vigente al momento en que se efectúe el pago, por concepto de suerte principal;--- b) El pago de los intereses moratorios convenidos en los títulos de crédito base de la acción, a razón del 15% anual, que se hayan generado a:



AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1274/2002

partir de su vencimiento y los que se sigan devengando hasta la total liquidación del adeudo;--- c) El pago de gastos y costas que se originen con motivo del presente juicio.--- 2. Dicha demanda fue admitida a trámite por el Juez Trigésimo Cuarto de lo Civil en el Distrito Federal, quien le asignó el expediente número 414/2001 de la Secretaría "A".--- 3. Por auto de 25 de junio de 2001, se admitió la demanda y se ordenó emplazar a la parte demandada.--- 4. El día 4 de julio de 2001 se realizó la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, notificando a mi mandante del juicio que se instauró en su contra.--- 5. El 11 de julio de 2001, mi mandante dio contestación a la demanda instaurada en su contra, en los términos contenidos en la misma.--- 6. El 14 de enero último, el juez de primera instancia dictó sentencia definitiva condenando a la parte que represento a cumplir con las prestaciones reclamadas, en términos de los siguientes puntos resolutivos:--- 'PRIMERO. Ha sido procedente la vía por la que se tramitó este juicio, en la que MAQUINARIA DIESEL, S.A. DE C.V. justificó plenamente la pretensión de pago; y la demandada TRITURADOS BASÁLTICOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., no justificó ni demostró sus defensas y excepciones, en consecuencia;--- SEGUNDO. Se condena a la demandada por conducto de su representante legal, para que pague a la actora o a quien sus derechos represente, la cantidad de [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] o su equivalente en

moneda nacional, al tipo de cambio vigente al momento de que efectúe el pago de dicha cantidad.--- TERCERO. Se condena a la demandada a pagar a favor de la actora, los intereses moratorios causados sobre la suerte principal, a la tasa pactada en los documentos fundatorios de la pretensión, desde la constitución en mora hasta la total solución del adeudo, previa su cuantificación en ejecución de sentencia mediante el correspondiente incidente.--- CUARTO. Se condena a la demandada a pagar a favor de la actora, las costas causadas en esta instancia.--- QUINTO. Para efectos de cumplir con la condena impuesta en este fallo, se concede a la demandada el plazo de CINCO DÍAS hábiles, contados a partir del siguiente en que la misma cause ejecutoria o sea legalmente ejecutable; en caso de no cumplir, hágase trance y remate de los bienes que les fueron embargados y con su producto pago a la actora.'--- **7. En contra de dicha resolución, mi mandante interpuso recurso de apelación que fue resuelto por la autoridad responsable mediante la sentencia que constituye el acto reclamado, cuyos puntos resolutivos son los siguientes:--- PRIMERO. Son inoperantes e infundados los agravios expresados en este toca.--- SEGUNDO. Se confirma la sentencia definitiva dictada el catorce de enero del dos mil dos, por el JUEZ TRIGÉSIMO CUARTO DE LO CIVIL del Distrito Federal, en el juicio EJECUTIVO MERCANTIL seguido por MAQUINARIA DIESEL, S.A. DE C.V., en contra de TRITURADOS BASÁLTICOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V.--- TERCERO. Se condena a la demandada al pago de las costas de ambas instancias.--- CUARTO. Notifíquese;**



AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1274/2002

devuélvanse los autos al juez A quo con testimonio de este fallo, para su conocimiento; y en su oportunidad archívese el toca como asunto concluido.”

Asimismo, en materia de constitucionalidad el peticionario de amparo esgrimió los siguientes conceptos de violación:

“...Si sus Señorías llegaran a estimar que la interpretación del artículo 1198 del Código de Comercio hecha por la Sala responsable es la correcta y que, en efecto, la ley exige que el oferente de una prueba testimonial mencione por qué considera que con ese medio de convicción acreditará lo que se pretende, a pesar de ser de su esencia y de su naturaleza, quien ofrece la prueba testimonial tiene que decir sacramentalmente que la ofrece porque conoce los hechos materia de la litis y espera que el declarante se conduzca con verdad, entonces dicho precepto es inconstitucional, pues no respeta las garantías de audiencia y de debido proceso que corresponden a todo individuo.--- En efecto, la garantía de audiencia, como una de las formalidades esenciales del procedimiento, no sólo se impone como obligación a las autoridades administrativas y judiciales, sino que gravita también como una carga u obligación del Poder Legislativo, que debe establecer en las leyes que promulgue los procedimientos adecuados en que se oiga a las partes.--- El artículo 1198 del Código de Comercio, interpretado como lo hace la Sala responsable, sería inconstitucional, pues no

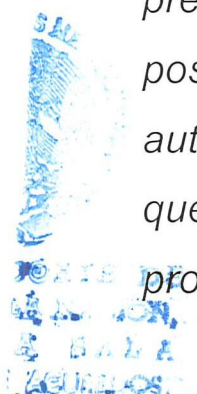


establecería la oportunidad de que las partes en juicio ofrezcan y desahoguen las pruebas en que finquen su defensa. El tener que ofrecer pruebas mediante formulismos sacramentales que no se precisan en forma alguna, deja al arbitrio judicial el admitir o rechazar las pruebas de las partes en perjuicio de éstas, pues serían éstas quienes decidirían si se manifestó con claridad qué hechos se pretenden acreditar y la razón por la que se considera que se puede llegar a acreditar.--- Semejante precepto no permite una adecuada oportunidad para ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa de las partes en juicio.--- Son aplicables al caso la jurisprudencia y precedentes que a continuación se transcriben:--- ‘AUDIENCIA, GARANTÍA DE. De entre las diversas garantías de seguridad jurídica que contiene el segundo párrafo del artículo 14 constitucional destaca, por su primordial importancia, la de audiencia previa. Este mandamiento superior, cuya esencia se traduce en una garantía de seguridad jurídica para los gobernados, impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades para que, de manera previa al dictado de un acto de privación, cumplan con una serie de formalidades esenciales, necesarias para oír en defensa de los afectados. Dichas formalidades y su observancia, a las que se unen, además, las relativas a la garantía de legalidad contenida en el texto del primer párrafo del artículo 16 constitucional, se constituyen como elementos fundamentales útiles para demostrar a los afectados por un acto de autoridad, que la resolución que los agravia no se dicta de un modo arbitrario



AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1274/2002

y anárquico sino, por el contrario, en estricta observancia del marco jurídico que la rige. Así, con arreglo en tales imperativos, todo procedimiento o juicio ha de estar supeditado a que en su desarrollo se observen, ineludiblemente, distintas etapas que configuran la garantía formal de audiencia en favor de los gobernados, a saber, que el afectado tenga conocimiento de la iniciación del procedimiento, así como de la cuestión que habrá de ser objeto de debate y de las consecuencias que se producirán con el resultado de dicho trámite, que se le otorgue la posibilidad de presentar sus defensas a través de la organización de un sistema de comprobación tal, que quien sostenga una cosa la demuestre, y quien estime lo contrario cuente a su vez con el derecho de demostrar sus afirmaciones; que cuando se agote dicha etapa probatoria se dé oportunidad de formular las alegaciones correspondientes y, finalmente, que el procedimiento iniciado concluya con una resolución que decida sobre las cuestiones debatidas, fijando con claridad el tiempo y forma de ser cumplidas.' (Cita precedentes) --- 'FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Estas son las que resultan necesarias para



garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado.' (Cita precedentes). --- 'ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL, GARANTÍA DEL. Debe estimarse que si algún valor tiene la garantía del artículo 14 constitucional, debe ser, no solamente obligando a las autoridades administrativas a que se sujeten a la ley, sino obligando al Poder Legislativo para que en sus leyes establezca un procedimiento adecuado en que se oiga a las partes.' (Cita datos de localización). --- 'AUDIENCIA, ALCANCE DE LA GARANTÍA DE. No obstante, que la ley que rige el acto reclamado no establezca la garantía de audiencia, existe la obligación por parte de las autoridades responsables, de concederla, para no incurrir en la violación del artículo 14 constitucional, que rige dicha garantía en relación con todos los gobernados sin excepción. Además, para determinar el justo alcance de la garantía de audiencia, es menester llegar a la conclusión de que si ha de tener verdadera eficacia, debe constituir un derecho de los particulares, no sólo frente a las autoridades administrativas y judiciales sino también frente a la autoridad legislativa, de tal manera que ésta quede obligada, para cumplir el expreso mandato constitucional, a consignar en sus leyes los procedimientos



AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1274/2002

necesarios para que se oiga a los interesados y se les de oportunidad de defenderse, en todos aquellos casos en que puedan resultar afectados sus derechos.' (Cita precedentes).--- **Pido expresamente a ustedes, señores magistrados federales, se pronuncien sobre la inconstitucionalidad del artículo 1198 del Código de Comercio, por ser contrario a la garantía de audiencia que consagran los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal...**"

TERCERO. Por auto de veintiséis de abril de dos mil dos, el Presidente del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al que por razón de turno tocó conocer del asunto, registró el expediente con el número D.C. 2966/2002; asimismo, mediante proveído del siete de mayo del mismo año admitió a trámite la demanda de garantías y, seguido el juicio en todas sus partes, en sesión correspondiente al trece de junio de dos mil dos, el mencionado Tribunal dictó sentencia, la que concluyó con el siguiente punto resolutivo:

"ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a TRITURADOS BASÁLTICOS Y DERIVADOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, por conducto de su apoderado general para pleitos y cobranzas CARLOS ALBERTO RAMOS VEGA, contra el acto que reclamó de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, consistente en la sentencia definitiva dictada con fecha catorce de marzo del año dos mil dos, en el toca de apelación número 581/2002."

SE
DE
LA
JUNTA
DE
LOS
JUECES

Las consideraciones en que se sustenta la sentencia recurrida, en la materia de constitucionalidad planteada, son del tenor literal siguiente:

“SEXTO. Por ser de estudio preferente, se examinará en este considerando el concepto de violación por medio del cual la quejosa tilda de inconstitucional el artículo 1198 del Código de Comercio.--- La inconforme aduce que el precepto legal combatido, no respeta las garantías de audiencia y debido proceso que corresponden a todo individuo, en virtud de que interpretado en la forma en que lo hace la Sala responsable sería inconstitucional, porque no establecería la oportunidad de que las partes ofrezcan y desahoguen las pruebas en las que finquen su defensa, al tener que ofrecer pruebas mediante formulismos sacramentales que no se precisan, dejando al arbitrio judicial el admitir o rechazar las pruebas ofrecidas, pues sería la autoridad quien decidiría si se manifestó con claridad qué hechos se pretenden demostrar y la razón por la que se pueden llegar a acreditar, por lo que dicho precepto no permite una adecuada oportunidad para ofrecer y desahogar pruebas, transcribiendo la quejosa, en apoyo a esas consideraciones, las tesis con los rubros: ‘AUDIENCIA, GARANTÍA DE. FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO’; ‘ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL, GARANTÍA DEL’; y ‘AUDIENCIA, ALCANCE DE LA



AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1274/2002

GARANTÍA DE.--- **El artículo 1198 del Código de Comercio, dispone:---** 'Las pruebas deben ofrecerse expresando claramente el hecho o hechos que se trata de demostrar con las mismas, así como las razones por las que el oferente considera que demostrarán sus afirmaciones; si a juicio del tribunal las pruebas ofrecidas no cumplen con las condiciones apuntadas, serán desechadas, observándose lo dispuesto en el artículo 1203 de este ordenamiento. En ningún caso se admitirán pruebas contrarias a la moral o al derecho.' --- **Ahora bien, es cierto que la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de nuestra Carta Magna prevé el respeto a las formalidades esenciales del procedimiento, entre las que se encuentra la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas de las partes; sin embargo, en todo procedimiento deben existir normas que lo regulen, permitiendo a los contendientes probar los hechos constitutivos de sus acciones, excepciones y defensas, dentro de un equilibrio justo, de manera que no quede alguno de ellos en estado de indefensión, y que permita también observar el principio de una justicia pronta y expedita, y es por eso que el legislador establece ciertos límites a la actividad probatoria.---** De lo anterior, debe decirse que, contrario a lo alegado por la quejosa, los requisitos exigidos por el artículo 1198 del Código de Comercio, no violan la garantía de audiencia, toda vez que no se deja en estado de indefensión a las partes, pues les permite probar los hechos constitutivos de sus acciones, excepciones y defensas, con el límite que la propia ley marca y dentro

de un justo equilibrio procesal, y el hecho de que la norma regule la forma en que deba ser ofrecida una probanza, no resta a su oferente la oportunidad de ofrecerla, pues sólo le señala la forma en que debe hacerlo para que su probanza sea admitida, y si bien el juzgador tiene la facultad para decidir si el ofrecimiento de probanzas reúne los requisitos establecidos en la norma, ello tampoco resulta violatorio de la garantía de audiencia y debido proceso, dado que esa facultad (no arbitrio) le confiere la propia ley, razón por la que resultan inaplicables las tesis que transcribe la inconforme, en virtud de que las formalidades esenciales del procedimiento a que se refiere el artículo 14 constitucional se traducen en la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas en que se finque la defensa; la oportunidad de alegar y el dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas; y, cada ordenamiento legal debe establecer el cómo satisfacer la garantía de audiencia; tal y como sucede con el capítulo específico de la tramitación del juicio ejecutivo mercantil, en el cual se establece la posibilidad de que el gobernado se defienda antes de que se lleve a cabo el acto privativo, respetando los principios de justo equilibrio entre las partes, celeridad y economía procesal.--- De lo anterior, debe concluirse que el artículo 1198 del Código de Comercio, no es violatorio de la garantía de audiencia y debido proceso.--- Al caso es aplicable por analogía, la Tesis número P. CXXXII/97, del Pleno de la Suprema Corte de



AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1274/2002

Justicia de la Nación, visible en la página 167, del Tomo VI, correspondiente al mes de septiembre de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:--- 'AUDIENCIA. EL CUMPLIMIENTO DE DICHA GARANTÍA POR EL LEGISLADOR NO IMPLICA LA POSIBILIDAD ILIMITADA DE PROBAR. (La transcribe).--- También encuentra apoyo por analogía, la Tesis número 1a. XLIII/2000, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 258, del Tomo XII, correspondiente al mes de diciembre de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:--- 'PRUEBAS EN EL JUICIO ORDINARIO CIVIL. LOS ARTÍCULOS 291 Y 298 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL QUE PREVÉN SU DESECHAMIENTO, NO VIOLAN LA GARANTÍA DE AUDIENCIA.'..."

CUARTO. La sentencia de mérito fue notificada a las partes, por lista fijada en los estrados del Tribunal del conocimiento, el veintiuno de junio del dos mil dos.

Inconforme con el sentido de la resolución, mediante escrito presentado el ocho de julio de dos mil dos, en la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito, la parte quejosa interpuso recurso de revisión.

QUINTO. Mediante proveído de diez de julio de dos mil dos, el Presidente del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito ordenó remitir el expediente del juicio de amparo y el escrito de agravios a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por auto de dos de agosto de dos mil dos, el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió el recurso de revisión de mérito y ordenó dar vista del asunto al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, quien a la postre no formuló pedimento legal, según se desprende de la constancia que obra a fojas 41 del toca de revisión número 1274/2002.

En acuerdo de veintisiete de agosto de dos mil dos, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó turnar el presente asunto al señor Ministro José Vicente Aguinaco Alemán, para la formulación de proyecto de resolución respectivo.

Mediante promoción presentada en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia del Alto Tribunal, el cinco de septiembre del dos mil dos, el quejoso, ahora recurrente, solicitó a los señores Ministros integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, requirieran al Juez Trigésimo Cuarto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, para que remitiera los autos originales del expediente del cual se deriva el presente recurso de revisión.

Con respecto a lo anterior, mediante proveído del diecisiete de septiembre del dos mil dos, el Presidente del Alto Tribunal acordó no solicitar los autos del juicio ejecutivo mercantil número 414/2001, aduciendo que, por regla general, para el estudio del recuso de revisión en amparo directo basta con tener a la vista los autos del



AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1274/2002

Recibo de amparo y el pliego de agravios, sin perjuicio de que, si lo estima necesario el Ministro designado como Ponente, se soliciten las constancias referidas.

Previo dictamen del Ministro ponente, y de los acuerdos presidenciales respectivos, este asunto, originalmente radicado en el Tribunal Pleno, pasó para ser resuelto en la Segunda Sala.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 94, párrafo séptimo y 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 83 fracción V, y 84, fracción II, de la Ley de Amparo, y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con lo previsto en los puntos Primero fracciones I y II, y Segundo, fracciones I, II y IV, del Acuerdo 5/1999, y puntos Segundo, Tercero, Cuarto y Tercero Transitorio del Acuerdo 5/2001, ambos emitidos por el Tribunal Pleno, en virtud de que se trata de un recurso de revisión interpuesto contra una sentencia dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito, al resolver un amparo directo en el que se impugnó la constitucionalidad del artículo 1198 del Código de Comercio, destacando que la característica de la litis en la revisión evidencia la innecesaria intervención del Tribunal Pleno en su resolución, dado que el presente asunto es un recurso de revisión interpuesto contra una sentencia dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito, ante el cual se hicieron valer conceptos de violación que incitan al estudio de inconstitucionalidad del artículo 1198 del Código

de Comercio, destacando que el tema que subsiste en revisión tiene precedentes en el Alto Tribunal.

SEGUNDO. La sentencia recurrida fue notificada al quejoso por medio de lista fijada el viernes veintiuno de junio de dos mil dos, según consta en la razón actuarial visible en la foja 103 vuelta, del expediente de amparo D. C. 2966/2002.

Tal notificación surtió efectos el día lunes dos siguiente; por tanto, de conformidad con lo previsto en el artículo 34, fracción II, de la Ley de Amparo, el plazo para la interposición del recurso de revisión a que se refiere el artículo 86 de la misma ley, corrió del martes veinticinco de junio al ocho de julio del dos mil dos, debiendo descontarse los días veintinueve y treinta de junio, y seis y siete de julio, por ser sábados y domingos; es decir, inhábiles para la tramitación del juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 23 de la ley de la materia y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Así, toda vez que el recurso al que este toca corresponde fue presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito, el día del vencimiento del plazo, o sea, el ocho de julio del dos mil dos, como se desprende del sello fechador que consta en la foja 4 del toca de revisión 1274/2001, debe concluirse con que su interposición fue oportuna.

TERCERO. La parte recurrente expresó los agravios que a continuación se transcriben.



AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1274/2002

“PRIMERO. Dicho precepto, para el Colegiado no es inconstitucional, pero sí lo es, pues no respeta las garantías de audiencia y de debido proceso que correspondan a todo individuo. --- En efecto, la garantía de audiencia, como una de las formalidades esenciales del procedimiento, no sólo se impone como obligación a las autoridades administrativas y judiciales, sino que gravita también como una carga u obligación del Poder Legislativo, que debe establecer en las leyes que promulgue los procedimientos adecuados en que se oiga a las partes.--- El artículo 1198 del Código de Comercio, interpretado como lo hace el Tribunal Colegiado que conoció de este amparo, sería inconstitucional, pues no establecería la oportunidad de que las partes en juicio ofrezcan y desahoguen las pruebas en que finquen su defensa.--- Dicho precepto deja al arbitrio judicial el admitir o rechazar las pruebas de las partes en perjuicio de éstas. Al respecto, el tribunal colegiado se pronunció diciendo:--- ‘...De lo anterior, debe decirse que, contrario a lo alegado por la quejosa, los requisitos exigidos por el artículo 1198 del Código de Comercio, no violan la garantía de audiencia, toda vez que no se deja en estado de indefensión a las partes, pues les permite probar los hechos constitutivos de sus acciones, excepciones y defensas, con el límite que la propia ley marca y dentro de un justo equilibrio procesal, y el hecho de que la norma regule la forma en que deba ser ofrecida una probanza, no resta a su oferente la oportunidad de ofrecerla, pues sólo le señala la forma en que debe hacerlo para que su probanza sea admitida, y si

bien el juzgador tiene la facultad para decidir si el ofrecimiento de probanzas reúne los requisitos establecidos en la norma, ello tampoco resulta violatorio de la garantía de audiencia y debido proceso, dado que esa facultad (no arbitrio) le confiere la propia ley, razón por la que resultan inaplicables las tesis que transcribe la inconforme, en virtud de que las formalidades esenciales del procedimiento a que se refiere el artículo 14 constitucional se traducen en la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas en que se finque la defensa; la oportunidad de alegar y el dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas; y, cada ordenamiento legal debe establecer el cómo satisfacer la garantía de audiencia; tal y como sucede con el capítulo específico de la tramitación del juicio ejecutivo mercantil, en el cual se establece la posibilidad de que el gobernado se defienda antes de que se lleve a cabo el acto privativo, respetando los principios de justo equilibrio entre las partes, celeridad y economía procesal....'--- **Sin embargo, el criterio del Colegiado resulta incorrecto.---** **Analicemos detenidamente la cuestión:---** **La facultad discrecional es el poder de libre apreciación que la ley reconoce a las autoridades sobre el contenido de sus actos o resoluciones. Esta libertad, autorizada por la ley, puede ser de mayor o menor rango y resulta visible cuando la autoridad tiene la elección entre dos decisiones.---** **Sin embargo, el ejercicio de la facultad discrecional está subordinada a las reglas de los artículos 14 y 16 de la Constitución, el primero en relación a la garantía de audiencia y en**



AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1274/2002

cuanto al segundo precepto, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar los actos que puedan traducirse en molestias a la posesión y derechos de los particulares.--- Aunque dicho ejercicio implica un juicio subjetivo de la autoridad, éste debe ser racional, y no arbitrario y caprichoso o contrario a la equidad, es decir, que no sea ilógico o contrario a los presupuestos generales del derecho, razón por la cual debe tener ciertos límites.--- Entendemos que limitar la facultad discrecional atribuida a un juez implicaría que se le restrinja su amplia libertad de valoración y decisión para cada caso concreto y que, a cambio, se le fijen reglas específicas de aplicación general a todos los casos, lo que además obligaría a regular todos los supuestos posibles que pudieran presentarse.--- También entendemos que la función jurisdiccional implica, por esencia, la interpretación y valoración de las normas jurídicas para aplicarlas a un caso concreto, por lo que sabemos que, por más que impongamos una facultad reglada a un juez, no se le puede privar totalmente de sus atributos naturales de interpretación y valoración, dado el sinnúmero de circunstancias que pueden presentarse en cada caso concreto.--- No sólo en el ejercicio de la función jurisdiccional, que es la que corresponde a un Juez, sino en cualquier tipo de acto de autoridad, sea de carácter administrativo, legislativo o judicial, las autoridades encargadas de emitirlos pueden estar investidas de facultad discrecional o de facultad reglada, o de ambas a la vez.-



CORTE DE
LA NACIÓN
SALA IV
E ACUERDO

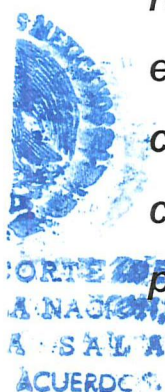
En principio, podemos decir que la presencia de una

o de otra facultad, se determina por la forma constitucional o la legal, según sea que a la autoridad le sean fijados, estrictamente, los parámetros y reglas específicas sobre los (sic) ha de emitir en su acto (facultad reglada), o bien que se le atribuya amplia libertad de valoración y decisión para cada caso concreto, proporcionándole tan sólo los lineamientos abstractos que normen su criterio (facultad discrecional).--- El acto o facultad discrecional no es, por ende, un acto arbitrario, entendiéndose por este último 'el realizado sin justificación legal, moral ni racional', pues la discrecionalidad atribuida a una autoridad, implica que ésta deberá actuar, antes que nada, conforme a una lógica sana, y sobre todo, de acuerdo con los principios de derecho y el orden constitucional y legal, debiendo por tanto, respetar la garantía de audiencia y fundar y motivar su acto en acatamiento al principio de legalidad, consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución.--- Resultan aplicables las siguientes tesis:--- 'FACULTADES DISCRECIONALES. APRECIACIÓN DEL USO INDEBIDO DE LAS CONCEDIDAS A LA AUTORIDAD. La base toral de las facultades discrecionales es la libertad de apreciación que la ley otorga a las autoridades para actuar o abstenerse, con el propósito de lograr la finalidad que la propia ley les señala, por lo que su ejercicio implica, necesariamente, la posibilidad de optar, de elegir, entre dos o más decisiones, sin que ello signifique o permita la arbitrariedad, ya que esa actuación de la autoridad sigue sujeta a los requisitos de fundamentación y motivación exigidos por el artículo 16 de



AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1274/2002

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual permite que los actos discrecionales sean controlados por la autoridad jurisdiccional.' (Cita precedentes y datos de localización).--- **'FACULTADES DISCRECIONALES. APRECIACIÓN DEL USO INDEBIDO DE ELLAS EN EL JUICIO DE AMPARO.** El uso del arbitrio o de la facultad discrecional que se concede a la autoridad administrativa puede censurarse en el juicio de amparo cuando se ejercita en forma arbitraria o caprichosa, cuando la decisión no invoca las circunstancias que concretamente se refieren al caso discutido, cuando éstas resultan alteradas o son inexactos los hechos en que se pretende apoyar la resolución, o cuando el razonamiento en que la misma se apoya es contrario a las reglas de la lógica.' (Cita precedentes y datos de localización).--- **La facultad discrecional no debe ejercerse en forma arbitraria o caprichosa; un acto o resolución emitido en ejercicio de una facultad discrecional resulta arbitrario cuando la autoridad no invoca las circunstancias que concretamente se refieren al caso discutido, cuando éstas resultan alteradas o son inexactos los hechos en que se pretende apoyar ese acto o resolución, o cuando el razonamiento en que se apoyan es contrario a las reglas de la lógica. Un acto de autoridad es arbitrario cuando no se justifica legal, moral ni racionalmente.**--- Toda resolución sobre la admisión o el desechamiento de pruebas es una resolución de carácter procesal. El desechamiento puede decretarse conforme a derecho o en violación de la ley. Si lo primero, santo y bueno. Si lo segundo, se incurre en



*una violación procesal en perjuicio del oferente.--- Si el oferente, actor o demandado, gana el juicio, santo y bueno también. Pero si lo pierde, se habrá incurrido en una violación procesal con trascendencia al resultado del fallo.--- La Ley de Amparo prescribe en forma imperativa que en los juicios seguidos ante los Tribunales Civiles se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido.--- Los requisitos que exige el artículo 1198 para que una prueba se considere correctamente ofrecida, son, a saber:--- a) La expresión clara del hecho o hechos que con la prueba ofrecida se tratan de demostrar, y--- b) La expresión de las razones por las que el oferente considera que la prueba ofrecida demostrará sus afirmaciones.--- Las anteriores son las únicas condiciones que se le imponen al oferente de una prueba para que le sea admitida, las cuales resultan *sui generis*, ya que se le da la facultad de que ella manifieste las razones por las que considera que demostrará sus afirmaciones además de expresar claramente el hecho o hechos que trata de demostrar con los medios de convicción que ofrece, es decir, si la oferente de una prueba expresa claramente los hechos o hechos (sic) que se pretenden demostrar, así como las razones por las que considera que la prueba ofrecida demostrará sus afirmaciones, se deben considerar reunidos tales requisitos, y por lo tanto la prueba le debe ser irremediabilmente admitida.--- La segunda condición, que consiste en simplemente*



AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1274/2002

manifestar el porqué el 'oferente' considera que con dicha prueba se acreditarán los hechos con que la ha relacionado, merece un estudio detallado.--- Hemos dicho que este artículo le da a la oferente la facultad de manifestar simple y llanamente las razones por las cuales considera que una prueba acreditará sus afirmaciones, y llenado dicho requisito se le admitirá la prueba.--- No obstante lo anterior, el mismo artículo 1198 establece lo siguiente: --- '...Si a ~~juicio~~ del Tribunal las pruebas ofrecidas no cumplen con las condiciones apuntadas serán desechadas...' --- es decir, le permite al juzgador sancionar las manifestaciones de la oferente, le otorga la facultad de decidir de prejuzgar sobre la pertinencia de una prueba, aun antes de que ésta se desahogue, con lo que estamos en un acto arbitrario, ya que no hay bases en la ley para que, de considerarse que no reúnen los requisitos para que sean admitidas las pruebas, el Juez pueda establecer porqué es que considera que no se cumple con tales requisitos, por lo que tal acto será realizado sin justificación legal, moral ni racional, o mejor dicho, con la justificación legal, moral o racional que le quiera dar el juzgador, lo que implica que él mismo puede decidir el rumbo que se le quiera dar al juicio, al permitirle admitir o desechar las pruebas.--- El mismo artículo 1198 contiene contradicciones, ya que por un lado le impone una condición sine qua non al oferente de una prueba, para que le sea admitida, la cual consiste en manifestar simple y llanamente, el porqué considera que con tal prueba se acreditarán sus afirmaciones, y



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA FEDERACION
 A NACION
 CASALTE
 ACUERDO

por otro lado, le otorga una facultad al juzgador, como lo dice el colegiado, para prejuzgar sobre dichas consideraciones, y si al juzgador no le parecen, satisfacen, no le gustan, le parecen pueriles, o simplemente no le agradan, no serán admitidas, lo cual deja en total estado de indefensión a las partes, lo que constituye una violación flagrante a la garantía de audiencia.--- Es por ello que no se permitiría a las partes una adecuada defensa, ya que si al juez no le parece o simplemente no le gusta la forma de cómo las partes ofrecieron sus pruebas, podrá sancionar tal acto, sin reglas claras ni precisas para hacerlo, sólo a su libre decisión, lo que no puede ser así, ya que los jueces no pueden actuar arbitrariamente en perjuicio de las partes, y privarlas del derecho de probar su acción o sus excepciones.--- Esta 'facultad' o mejor llamada arbitrio, resulta inconstitucional, ya que viola la garantía de audiencia, porque se le priva a las partes del derecho de ser oídos en juicio y defender sus derechos utilizando los elementos de convicción con los que cuentan, en tanto que si el legislador quiso que los oferentes de una prueba manifestaran qué hechos pretendían probar y por qué razones, fue únicamente con el ánimo de dar mayor claridad o cause a los juicios, pero para ello dotó al juzgador de una facultad de decidir qué pruebas sí cumplen con tales requisitos y cuáles no, a su simple decisión, lo que vino a romper con la garantía antes mencionada.--- En efecto, el colegiado sostiene que es una facultad y no es al arbitrio la que se menciona en el artículo 1198. Sin



AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1274/2002

embargo, no expone porqué considera que es una facultad y porqué no es al arbitrio el conceder que el juzgador decida o califique si se cumplieron o no las normas para ofrecer las pruebas, esto es, si se le aclaró o se le indicó cuál es el efecto o alcance probatorio que se pretende con tal medio de convicción.--- Es por ello que si la exposición de la oferente de la prueba en cuanto a las razones por las que considera que demostrará sus afirmaciones no son claras para el juzgador, ya sea porque no las entiende o no le son suficientes, entonces lo procedente sería o bien prevenirlo para que aclarara tal cuestión, o dejarlo hasta la sentencia definitiva en la que valorara conjuntamente todos los medios de convicción y se pronunciara sobre cada una de las pruebas aportadas a la contienda.--- Al no haberse decidido si la facultad que establece el artículo 1198 es o no discrecional, causa un agravio a la parte que represento, razón por la cual habrán de ser sus señorías quienes tengan que pronunciarse sobre el particular, decidiendo si esto afecta a la garantía de audiencia consagrada por el artículo 14 constitucional.--- Son aplicables al caso, la jurisprudencia y precedentes que a continuación se transcriben:--- 'AUDIENCIA, GARANTÍA DE. De entre las diversas garantías de seguridad jurídica que contiene el segundo párrafo del artículo 14 constitucional destaca, por su primordial importancia, la de audiencia previa. Este mandamiento superior, cuya esencia se traduce en una garantía de seguridad jurídica para los gobernados, impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades para que,

TE
NACIONAL
SALA
CUERDOS

de manera previa al dictado de un acto de privación, cumplan con una serie de formalidades esenciales, necesarias para oír en defensa de los afectados. Dichas formalidades y su observancia, a las que se unen, además, las relativas a la garantía de legalidad contenida en el texto del primer párrafo del artículo 16 constitucional, se constituyen como elementos fundamentales útiles para demostrar a los afectados por un acto de autoridad, que la resolución que los agravia no se dicta de un modo arbitrario y anárquico sino, por el contrario, en estricta observancia del marco jurídico que la rige. Así, con arreglo en tales imperativos, todo procedimiento o juicio ha de estar supeditado a que en su desarrollo se observen, ineludiblemente, distintas etapas que configuran la garantía formal de audiencia en favor de los gobernados, a saber, que el afectado tenga conocimiento de la iniciación del procedimiento, así como de la cuestión que habrá de ser objeto de debate y de las consecuencias que se producirán con el resultado de dicho trámite, que se le otorgue la posibilidad de presentar sus defensas a través de la organización de un sistema de comprobación tal, que quien sostenga una cosa la demuestre, y quien estime lo contrario cuente a su vez con el derecho de demostrar sus afirmaciones; que cuando se agote dicha etapa probatoria se dé oportunidad de formular las alegaciones correspondientes y, finalmente, que el procedimiento iniciado concluya con una resolución que decida sobre las cuestiones debatidas, fijando con claridad el tiempo y forma de ser cumplidas.' (Cita precedentes)--- 'FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE



AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1274/2002

GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.

La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado.' (Cita precedentes)--- 'ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL, GARANTÍA DEL. Debe estimarse que si algún valor tiene la garantía del artículo 14 constitucional, debe ser no solamente obligando a las autoridades administrativas a que se sujeten a la ley, sino obligando al Poder Legislativo para que en sus leyes establezca un procedimiento adecuado en que se oiga a las partes.'--- *Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, t. LXXXIX, Vol. III, P. 2428. 'AUDIENCIA, ALCANCE DE LA GARANTÍA DE. No obstante, que la ley que rige el acto reclamado no establezca la garantía de audiencia, existe la obligación por parte de las autoridades responsables, de*

TE
ACIO
SAL
DEBOS

concederla, para no incurrir en la violación del artículo 14 constitucional, que rige dicha garantía en relación con todos los gobernados sin excepción. Además, para determinar el justo alcance de la garantía de audiencia, es menester llegar a la conclusión de que si ha de tener verdadera eficacia, debe constituir un derecho de los particulares, no sólo frente a las autoridades administrativas y judiciales sino también frente a la autoridad legislativa, de tal manera que ésta quede obligada, para cumplir el expreso mandato constitucional, a consignar en sus leyes los procedimientos necesarios para que se oiga a los interesados y se les de oportunidad de defenderse, en todos aquellos casos en que puedan resultar afectados sus derechos.' (cita precedentes).--- **Los razonamientos anteriores nos deben llevar a las siguientes conclusiones:--- El artículo 1198 del Código de Comercio vigente es inconstitucional, en virtud de que viola la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 de la Constitución, ya que:--- Le otorga al juzgador la facultad de decidir y prejuzgar sobre la pertinencia de una prueba, aún antes de que ésta se desahogue.--- La facultad discrecional que se concede al juzgador es para que su arbitrio sancione si un derecho está bien o no ejercido, sólo por la forma en que se expone, mas no por la consecuencia que éste pueda traer.--- La facultad discrecional sanciona apreciaciones de las partes, a las que llama razones por las que el oferente considera que demostrará sus afirmaciones, lo que implica que éstas no valdrán, sino las (sic) finalmente sostenga el juzgador.--- El juzgador es quien decide**



AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1274/2002

cómo debe ejercerse un derecho y no la ley, pues aunque ésta establece los requisitos que debe contener el escrito en el que se ofrezca una prueba, quien sanciona si tales requisitos se conllevan y no es la ley misma que los impuso, sino el juzgador.--- Por todo lo anterior, solicito a sus señorías en reparación de las garantías violadas a mis mandantes, decreten que el artículo 1198 es inconstitucional y que por tanto, a mi mandante, quien ha demandado su declaración ante la autoridad competente, no le es aplicable tal precepto y por ello, se debe ordenar la reparación del procedimiento para el efecto de que se ordene la admisión de las pruebas que ofreció en tiempo y forma."

CUARTO. Antes de proseguir, conviene destacar que, como antes se mencionó, el Tribunal Colegiado de Circuito que emitió la sentencia recurrida no envió a esta Suprema Corte de Justicia el expediente natural del índice de la Sala Civil responsable, ni el expediente del Juez de Primera Instancia; sin embargo, ello no impide resolver el recurso en estudio en razón de la aplicación del criterio que más adelante se transcribirá, el cual, a pesar de no estar referido directamente al recurso de revisión en amparo directo, encuentra aplicación en la especie, máxime que los expedientes naturales serán innecesarios atento al sentido que regirá en este fallo.

El criterio judicial aludido es el siguiente:

Tesis aislada 2ª. CXXXVI/97, Novena Época, Segunda Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, noviembre de 1997, página 253, que dice:

“AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DE UN ACTO JUDICIAL DE APLICACIÓN. PARA SU PROCEDENCIA Y ESTUDIO NO ES INDISPENSABLE EL EXPEDIENTE NATURAL. Si se reclama de inconstitucional de una ley con motivo de su primer acto de aplicación dictado en un juicio ordinario, no es indispensable la exhibición del expediente del juicio natural para la procedencia del amparo, ni para el estudio de la constitucionalidad de la norma impugnada, en virtud de que, conforme al artículo 149 de la ley de la materia, la autoridad responsable sólo está obligada a remitir, junto con su informe justificado, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar dicho informe y, en términos del artículo 152 del propio ordenamiento, su obligación radica en expedir, con toda oportunidad, las copias o documentos que las partes le soliciten a fin de estar en posibilidad de rendir sus pruebas en la audiencia del juicio de garantías, pudiendo, incluso, pedir los originales cuando se trate de actuaciones concluidas.”

QUINTO. Como cuestión previa es necesario determinar si en el caso se satisfacen los requisitos de procedencia del recurso de revisión, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Cuarto Transitorio del Decreto de reformas a ésta, de diez de junio de mil novecientos noventa y nueve, en vigor a partir del día doce



AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1274/2002

siguiente; 83, fracción V, y 93 de la Ley de Amparo; 10, fracción III y 21 fracciones III, incisos a) y b), y XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en términos de lo previsto en el Acuerdo General 5/1999, emitido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en especial, en el punto primero, fracciones I y II.

Del análisis armónico y concatenado de las normas constitucionales y legales referidas, así como del Acuerdo General Plenario en cita, se deduce que para que la revisión en amparo directo sea procedente es indispensable que concurran los siguientes requisitos:

I. Que en la demanda de amparo se haya planteado la inconstitucionalidad de una ley o la interpretación directa de un precepto de la Constitución y que la sentencia contenga el pronunciamiento relativo; o bien, que debiendo haberse hecho, tal estudio se haya omitido en la resolución correspondiente.

II. Que el problema de constitucionalidad entrañe la fijación de un criterio jurídico de importancia y trascendencia a juicio de la Sala respectiva o del Tribunal Pleno, lo que se establecerá tomando en cuenta los criterios especificados en el Acuerdo 5/1999, antes referido.

En el orden expuesto, debe examinarse si el presente recurso de revisión reúne los requisitos de procedibilidad antes especificados.

Por lo que se refiere al primero, cabe hacer notar que en la demanda de amparo directo se cuestionó la constitucionalidad del

artículo 1198 del Código de Comercio, y que en la sentencia recurrida existe decisión sobre ese punto, siendo ésta precisamente la materia de la revisión.

En cuanto al segundo requisito, a juicio de esta Segunda Sala el caso cumple con los requisitos de importancia y trascendencia, porque los tópicos de constitucionalidad a que se refiere la demanda de garantías constituyen un aspecto respecto del cual no se ha sentado jurisprudencia.

De acuerdo con lo dicho, debe concluirse que el recurso de revisión es procedente y debe entrarse a su estudio.

SEXTO. Antes de abordar el examen del escrito de agravios y para una mejor intelección del sentido que regirá esta sentencia, conviene precisar el punto de constitucionalidad que debe dirimirse.

En los conceptos de violación que esgrimió en su demanda de garantías, la parte quejosa alegó sustancialmente que el artículo 1198 del Código de Comercio es inconstitucional al no respetar las garantías de audiencia y de debido proceso, transgrediendo los artículos 14 y 16 constitucionales, pues el que para ofrecer pruebas se tengan que expresar formulismos sacramentales -que no se precisan en forma alguna- deja al arbitrio judicial el admitirlas o rechazarlas en perjuicio del oferente, lo que se traduce en que no se le permita una adecuada oportunidad para ser escuchado y acreditar su dicho.

Con respecto a lo anterior, el Tribunal Colegiado determinó que si bien es cierto que la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución prevé el respeto a las formalidades esenciales



AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1274/2002

procedimiento, entre las que se encuentra la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas de las partes, también lo es que deben existir normas que regulen tal procedimiento, a la vez que el Juez debe tener facultad –no arbitrio- para determinar si éstas se cumplieron dentro de un equilibrio justo, de manera que no quede alguna de las partes en estado de indefensión y se respete el principio de una justicia pronta y expedita, lo que ocurre en el caso del artículo 1198 del Código de Comercio que permite probar a las partes los hechos constitutivos de sus acciones, excepciones y defensas, siendo que el hecho de que establezca la forma en que deba ser ofrecida una probanza no resta a su oferente la oportunidad de ofrecerla, razones por las que –concluye el Tribunal Colegiado- la norma en cita no transgrede la garantía de audiencia como lo alega la quejosa.

Por otro lado, de una lectura detenida de los agravios se deduce que la quejosa alega, en esencia, que el Tribunal Colegiado se pronunció a favor de la constitucionalidad el artículo 1198 del Código de Comercio de forma incorrecta, pues interpretado como lo hace en su sentencia, el precepto contradice el texto constitucional al permitirle al juzgador sancionar las manifestaciones del oferente de una prueba y prejuzgar sobre su pertinencia aún antes de que sea desahogada, dejando a su arbitrio el admitirlas o rechazarlas, ya que no hay bases en el precepto que determinen cuándo no se cumplen los requisitos que exige, o que proporcionen los lineamientos abstractos que deben normar su criterio, lo que se traduce en que el desechamiento de las pruebas puede ser realizado de forma arbitraria, sin justificación legal, moral y racional o con la que el juez le quiera dar, afectándose las defensas del oferente, lo que redundaría en transgresión a las garantías de audiencia y debido proceso.

De lo anterior se desprende que el punto a dilucidar consiste en determinar si la norma impugnada transgrede las garantías de audiencia y debido proceso previstas en el artículo 14 constitucional, al normar la forma en que deben ofrecerse las pruebas en el juicio ejecutivo mercantil y al otorgar facultades al juzgador para determinar si se cumplieron dichas formalidades.

Ahora bien, conviene precisar que aun cuando el quejoso aduce que el precepto que combate transgrede al artículo 16 constitucional, en realidad todas sus alegaciones se refieren a las garantías de audiencia y debido proceso, contenidas en el párrafo segundo del artículo 14, razón por la que el estudio del asunto se hará únicamente a la luz de este precepto constitucional, el cual dice:

“Artículo 14. (...)

Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.”

La anterior transcripción revela que la garantía que tutela el precepto transcrito consiste en la defensa de que dispone todo gobernado frente a actos que tiendan a privarlo de sus derechos, y se integra, a su vez, con cuatro garantías específicas de seguridad jurídica, que son:





AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1274/2002

- a) Que en contra de la persona a quien pretenda privar de alguno de los bienes jurídicos tutelados por la disposición constitucional, se siga un juicio.
- b) Que el juicio se substancie ante tribunales previamente establecidos.
- c) Que en el juicio se observen las formalidades esenciales del procedimiento; y,
- d) Que el fallo respectivo se dicte conforme a las leyes existentes con anterioridad al hecho.

Conviene tener en cuenta lo sostenido por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia P/J.47/95, visible en la página 133, Tomo II, diciembre de mil novecientos noventa y cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del siguiente tenor literal:

***“FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO.
SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y
OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.***

La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga ‘se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento’.

Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del

TE DE
LACION
SALA
VERDOS

procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado.”

En términos de la tesis antes transcrita, los cuatro requisitos que se señalan: la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias, la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas en que se finque la defensa, la posibilidad de alegar y el dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas, constituyen en sí mismos parte de la garantía de audiencia y no se pueden dar uno aislado del otro porque son los elementos esenciales e insubstituibles que conforman el marco de actuación de las autoridades, de forma que cuando cualquiera de ellos se ve afectado o se omite, se violenta en esencia el principio de seguridad jurídica que tutela la Constitución.

Así las cosas, resulta que las formalidades esenciales del procedimiento son aquellas que resultan necesarias e indispensables para garantizar una adecuada y oportuna defensa previa al acto privativo, de tal suerte que su omisión o infracción produzca indefensión al afectado, o lo coloque en una situación que afecte gravemente su defensa.

Ahora bien, al reclamar el precepto que tilda de inconstitucional, el quejoso, ahora recurrente, se sitúa en el segundo de los requisitos enunciados; es decir, en la falta de oportunidad que tuvo para probar sus aseveraciones.





AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1274/2002

Cabe precisar que, en efecto, como adecuadamente lo aduce la quejosa, la garantía de audiencia constituye un derecho de los particulares, no sólo frente a las autoridades judiciales y administrativas que en todo caso deben ajustar sus actos a las leyes aplicables, sino también frente a las legislativas que están obligadas a cumplir el mandato constitucional, consignando en sus leyes los procedimientos necesarios para que se escuche a los interesados y se les dé la oportunidad de defenderse en todos aquellos casos en que puedan resultar afectados sus derechos, lo que significa que las leyes que expidan deben establecer los mecanismos de defensa u oposición al potencial acto privativo.

Así las cosas, la garantía de audiencia se hace efectiva a los gobernados a través de leyes secundarias que deben respetar los principios mencionados, tendiendo a regular cada una de las situaciones que se pudieran presentar en la práctica, sin que ello implique que puedan excederse en el marco previsto por la propia garantía individual.

En ese contexto, cada ordenamiento debe establecer cómo satisfacer la garantía de audiencia del destinatario de la ley, para que éste se encuentre en posibilidad de defenderse antes de que se lleve a cabo un acto privativo en su perjuicio.

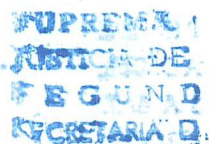
Ahora bien, una adecuada y oportuna defensa requiere -en todo procedimiento previo al acto privativo- de las etapas procesales referidas, independientemente de la materia de que se trate y de la autoridad ante la cual se ventile. Estas etapas se desarrollan a través de formas, requisitos o actos específicos, tales como notificaciones,

emplazamientos, términos para contestar o para oponerse a las pretensiones de privación, plazos para ofrecer pruebas, etc., y conviene precisar que estas formas o requisitos pueden variar en los diferentes juicios o procedimientos, según el acto de privación de que se trate, siempre que resulten apropiados y suficientes para satisfacer plenamente la oportunidad de defensa del afectado; además, debe apuntarse que el reconocimiento de la garantía de defensa en materia de prueba, se ha traducido en el otorgamiento de una serie de facultades en favor de las partes en un juicio, entre las que destacan:

1. Que se abra un término probatorio suficiente.
2. Que se propongan medios de prueba.
3. Que los medios de prueba debidamente propuestos sean admitidos.
4. Que la prueba admitida sea practicada.
5. Que la prueba practicada sea valorada.

Ahora bien, la norma impugnada dice:

“Art. 1198. Las pruebas deben ofrecerse expresando claramente el hecho o hechos que se trata de demostrar con las mismas, así como las razones por las que el oferente considera que demostrarán sus afirmaciones; si a juicio del tribunal las pruebas ofrecidas no cumplen con las condiciones apuntadas, serán desechadas, observándose lo dispuesto en el artículo 1203 de este ordenamiento. En ningún caso se admitirán pruebas contrarias a la moral o al derecho.”


 SUPREMA
 JUSTICIA DE
 REPUBLICA
 SECRETARIA D.



AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1274/2002

Por la relación existente entre el artículo transcrito y el diverso 1203 del mismo ordenamiento, es conveniente transcribir este último, que a la letra dice:

“Artículo 1203. Al día siguiente en que termine el periodo del ofrecimiento de pruebas, el Juez dictará resolución en la que determinará las pruebas que se admitan sobre cada hecho, pudiendo limitar el número de testigos prudencialmente. En ningún caso se admitirán pruebas contra del derecho o la moral; que se hayan ofrecido extemporáneamente, sobre hechos no controvertidos o ajenos a la litis; sobre hechos imposibles o notoriamente inverosímiles, o bien que no reúnan los requisitos establecidos en el artículo 1198 de este código. (...)”

De lo anterior se desprende que en un juicio especial mercantil (título del Código de Comercio en el cual está inserta la disposición combatida), las pruebas deben promoverse cumpliendo con los siguientes requisitos:

- a) Que se exprese con claridad cuál es el hecho o hechos que se tratan de demostrar con las mismas; y,
- b) Que se precisen las razones por las que se estima que con dichas pruebas se demostrarán sus afirmaciones.

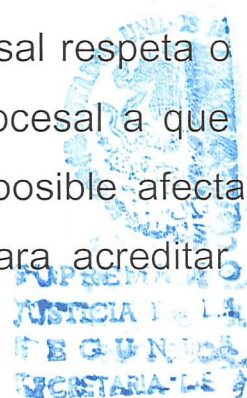
Ahora bien, esta Segunda Sala considera que la disposición que se analiza no deja en estado de indefensión a las partes y por lo tanto no transgrede ninguna formalidad esencial del procedimiento,

conclusión a la que se llega en atención a las siguientes consideraciones.

En primer orden, resulta pertinente precisar que los requisitos establecidos en el precepto atienden a criterios de idoneidad, utilidad y trascendencia de los medios probatorios, y obedecen a un principio de congruencia consistente en que las pruebas deben guardar un nexo directo con los hechos que se traten de probar, pues todo medio de prueba que no conduce directamente a justificar los hechos debatidos en un proceso, no debe admitirse por el órgano jurisdiccional. Dicho en otras palabras, todo medio probatorio que se ofrezca en un procedimiento, forzosamente debe guardar relación entre los hechos discutidos y discutibles y, además, tener aptitud para probarlos.

Lo anterior cobra especial importancia por la circunstancia de que es práctica dilatoria común en los procedimientos mercantiles, que se presentan promociones a sabiendas que no concurren presupuestos de hecho o de derecho, con el propósito de alargar innecesariamente los juicios con el desahogo de pruebas inútiles.

En segundo lugar, cabe recordar lo antes dicho en el sentido de que las formalidades esenciales del procedimiento -que exige el texto constitucional para el debido respeto de la garantía de audiencia- son las que garantizan una adecuada y oportuna defensa para el particular, y para determinar si una disposición procesal respeta o no esta garantía basta con comprobar si el sistema procesal a que se refiere, establece o no la oportunidad para que el posible afectado pueda ser oído en su defensa, y rendir pruebas para acreditar su dicho, antes de que sea afectado su interés jurídico.





AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1274/2002

En el tenor expuesto, resulta que la norma combatida concede la oportunidad a las partes de ofrecer, aportar y rendir las pruebas que estimen pertinentes y convenientes, con independencia de la manera correcta o incorrecta en que lo hagan, situación que en todo caso constituye un problema de legalidad, pero que no implica, ante la eventualidad de que no se verifique el desahogo de la prueba propuesta por causas imputables al oferente -como acontece en la especie-, que se constituya en una limitación a la capacidad probatoria de las partes, contraria a lo dispuesto por la Constitución.

Por otra parte, la ley impugnada en sí misma cumple cabalmente con la garantía de audiencia desde el momento en que establece los requisitos bajo los cuales deberán ofrecerse las pruebas, quedando las partes enteradas de las formas y términos en que deben proceder, además de que hace de su conocimiento tal medida preventiva, pues establece que en caso de no cumplir con los requisitos debidos, las pruebas propuestas serán desechadas.

Así, también se justifica la disposición legislativa que concede facultades al juzgador para desechar las pruebas que no reúnan los requisitos establecidos en la propia normatividad que se comenta, pues para la operancia de la norma, es de rigor que alguien determine si en un caso concreto se cumplieron, o no, los requisitos que establece.

Además de lo anterior, cabe agregar que los requisitos anteriores ningún perjuicio irrogan al interesado al exigirle que exprese con claridad cuál es el hecho que trata de demostrar con las pruebas que ofrece, y que precise las razones por las que estima que

con ellas demostrará sus afirmaciones, pues si tal ofrecimiento es de buena fe, o en su caso se demuestra que efectivamente las pruebas ofrecidas tienen relación con los hechos, las mismas serán admitidas, y sólo en ese caso de ser omiso, se tendrán por no admitidas, lo que no puede ni debe calificarse de inconstitucional, puesto que con esa regulación no se coarta ni impide al impetrante de ofrecer pruebas, siempre que se ajuste en ese dispositivo procesal, y sin duda proviene de la preocupación del legislador de darle mayor prontitud e inmediatez al trámite procesal mercantil, en acatamiento al principio de expedites previsto en el artículo 17 constitucional.

Es aplicable a las anteriores consideraciones, por similitud jurídica, el criterio sustentado por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis número P.CXXXII/97, localizable a fojas 167, del Tomo VI, septiembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, la que en su literalidad establece:

“AUDIENCIA. EL CUMPLIMIENTO DE DICHA GARANTÍA POR EL LEGISLADOR NO IMPLICA LA POSIBILIDAD ILIMITADA DE PROBAR. La garantía de audiencia tiene como parte medular el respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, las que han sido definidas por este alto tribunal como aquellas etapas o trámites que garantizan una adecuada defensa. Lo anterior no implica que el legislador esté obligado a establecer en los ordenamientos procesales la facultad ilimitada de ofrecer pruebas y el consiguiente deber jurídico del órgano jurisdiccional de desahogarlas y valorarlas, ya que es lógico que el propio legislador, en aras de un adecuado equilibrio procesal y por respeto a



AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1274/2002

la garantía de administración de justicia expedita y a los principios procesales de economía y celeridad, establezca límites a la actividad probatoria, los cuales no pueden ir, desde luego, al extremo de dejar sin defensa a las partes. De esta forma, las formalidades esenciales del procedimiento se traducen en una serie de reglas que permiten a las partes probar los hechos constitutivos de su acción o de sus excepciones y defensas, dentro de un justo equilibrio que, por un lado, no dejen en estado de indefensión a las partes y, por el otro, aseguren una resolución pronta y expedita de la controversia.”

Ahora bien, cabe señalar que la Primera Sala del Alto Tribunal emitió pronunciamiento donde resolvió la misma problemática jurídica que aquí se analiza, en el sentido que esta Segunda Sala comparte y que hace suyo, aunque conviene destacar que si bien es cierto que no se pronunció directamente con relación al artículo 1198 del Código de Comercio, sí lo hizo respecto de diversos preceptos legales de contenido similar en redacción, e idénticos desde el punto de vista jurídico, como lo son los artículos 291 y 298 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, los cuales disponen:

“Art. 291. Las pruebas deben ofrecerse expresando con toda claridad cual es el hecho o hechos que se tratan de demostrar con las mismas así como las razones por las que el oferente estima que demostrarán sus afirmaciones, declarando en su caso en los términos anteriores el nombre y domicilio de testigos y peritos y pidiendo la citación de la contraparte para absolver

posiciones; si a juicio del tribunal las pruebas ofrecidas no cumplen con las condiciones apuntadas, serán desechadas, observándose lo dispuesto en el artículo 298 de este ordenamiento.”

“Art. 298. Al día siguiente en que termine el período del ofrecimiento de pruebas, el juez dictará resolución en la que determinará las pruebas que se admitan sobre cada hecho, pudiendo limitar el número de testigos prudencialmente. En ningún caso el juez admitirá pruebas o diligencias ofrecidas extemporáneamente, que sean contrarias al derecho o la moral, sobre hechos que no hayan sido controvertidos por las partes, o hechos imposibles o notoriamente inverosímiles, o bien que no reúnan los requisitos establecidos en el artículo 291 de este Código...”

Así, como antes se adelantó, los preceptos transcritos, cuyo contenido es idéntico a la norma combatida en este juicio, fueron motivo de análisis, en cuanto a su constitucionalidad, por parte de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver, en sesión de nueve de agosto de dos mil, por cinco votos, el amparo directo en revisión 344/2000, de donde derivó la Tesis 1a. XLIII/2000, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, diciembre de 2000, página 258, que es del tenor literal siguiente:

“PRUEBAS EN EL JUICIO ORDINARIO CIVIL. LOS ARTÍCULOS 291 Y 298 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO



AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1274/2002

FEDERAL QUE PREVÉN SU DESECHAMIENTO, NO VIOLAN LA GARANTÍA DE AUDIENCIA. Del análisis de lo dispuesto en los mencionados preceptos legales, se infiere que dentro del procedimiento ordinario civil, en ningún caso se admitirán las pruebas que se ofrezcan sin expresar con toda claridad cuál es el hecho o hechos que se tratan de demostrar con las mismas y las razones por las que el oferente estima que demostrarán sus afirmaciones. Ahora bien, la circunstancia de que en el citado código no se instrumente un procedimiento de prevención para aplicar en los casos en que se ofrezcan pruebas sin cumplir con tales requisitos, ~~no~~ viola la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 de la Constitución Federal. Ello es así, porque, por un lado, los referidos artículos 291 y 298 conceden la oportunidad a las partes de ofrecer, aportar y rendir las pruebas que estimen pertinentes, cumpliendo así con las formalidades esenciales del procedimiento que exige el texto constitucional para el debido respeto de la garantía de referencia, sin que el procedimiento especial de prevención señalado sea exigencia para el respeto de dichas formalidades; y por el otro, las partes desde que se abre el juicio a prueba, no sólo conocen las exigencias bajo las cuales habrán de ofrecer sus pruebas, sino también la sanción que se les aplicará en caso de no cumplir con aquéllas. Esto es, los requisitos que condicionan el ofrecimiento de pruebas no restringen la capacidad probatoria de las partes en el juicio ordinario civil, pues no privan al gobernado de la

oportunidad de su aportación, sino que únicamente lo constriñen a cumplir una obligación que constituye una formalidad más del procedimiento. Además, se justifica la disposición contenida en el citado artículo 298 que concede facultades al juzgador para desechar las pruebas que no reúnan los requisitos establecidos en el diverso artículo 291, sin necesidad de prevenir al promovente para que aclare las omisiones en que haya incurrido, porque tal disposición tiene el evidente propósito de evitar que el procedimiento civil se prolongue de manera injustificada, más allá de los términos previstos para el ofrecimiento y desahogo de pruebas, cumpliendo de esta manera con el imperativo contenido en el artículo 17 constitucional, en el sentido de que la impartición de justicia debe ser expedita.

Cabe apuntar que el anterior criterio fue invocado por esta Segunda Sala en la sesión de ocho de marzo de dos mil dos, al resolver, bajo la ponencia del señor Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, por unanimidad de cuatro votos, el amparo directo en revisión número 1579/2001, interpuesto por “Grupo Financiero Serfín”, sociedad anónima de capital variable, ahora “Grupo Financiero Santander Serfín”, sociedad anónima de capital variable, en el que demandó la inconstitucionalidad de los artículos 98 y 298 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.

En el tenor expuesto cabe concluir que los requisitos que condicionan el ofrecimiento de pruebas no restringen la capacidad probatoria de las partes en el juicio especial mercantil, pues no privan al posible afectado de la oportunidad de su aportación, sino que



AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1274/2002

nicamente lo constriñen a cumplir una obligación que constituye una formalidad más del procedimiento, por lo que resulta evidente de que el artículo 1198 del Código de Comercio es respetuoso de la garantía de audiencia.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO. En la materia de la revisión, competencia de la Suprema Corte de Justicia la Nación, se confirma la sentencia recurrida.

SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a "Triturados Basálticos y Derivados", Sociedad Anónima de Capital Variable, respecto de las autoridades y por los actos precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al Tribunal Colegiado que los envió, y en su oportunidad, archívese.

Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Presidente y ponente José Vicente Aguinaco Alemán.

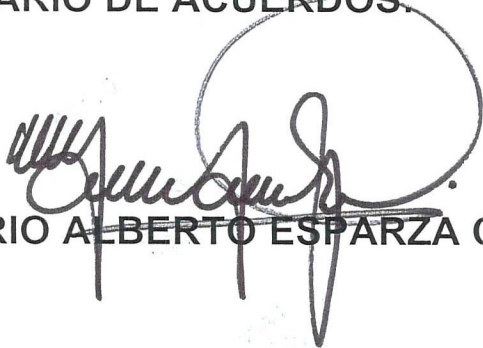
Firman el Ministro Presidente y ponente, con el Secretario de Acuerdos de la Segunda Sala que autoriza y da fe.

PRESIDENTE Y PONENTE:



MINISTRO JOSÉ VICENTE AGUINACO ALEMÁN.

SECRETARIO DE ACUERDOS:



LIC. MARIO ALBERTO ESPARZA ORTIZ.

El Secretario de Acuerdos de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hace constar que, en cumplimiento al artículo 191 de la Ley de Amparo, al terminar las labores de este día se fijó, en el lugar destinado para las notificaciones, una lista de los asuntos tratados en la audiencia de esta Sala celebrada el día de hoy, en la que se incluye este expediente (o t o c a)

... AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1274/2002

México, D. F., A VEINTIUNO DE FEBRERO DE DOS MIL TRES.

EL SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA SEGUNDA SALA



Esta hoja corresponde al amparo directo en revisión 1274/2002, promovido por TRITURADOS BASÁLTICOS Y DERIVADOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. Fallado el día veintiuno de febrero de dos mil tres, por unanimidad de cinco votos, en el sentido siguiente: 'PRIMERO. En la materia de la revisión, competencia de la Suprema Corte de Justicia la Nación, se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a "Triturados Basálticos y Derivados", Sociedad Anónima de Capital Variable, respecto de las autoridades y por los actos precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.' CONSTE.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA FEDERACIÓN
SECRETARÍA DE ACUERDOS

10 MAR. 2003

EN Y POR MEDIO DE LISTA SE NOTIFICO LA RESOLUCION ANTERIOR A LAS PARTES. CONSTE.

SIENDO LAS CATORCE HORAS DE LA FECHA ANTES INDICADA Y EN VIRTUD DE NO HABER COMPARECIDO LOS INTERESADOS A OIR NOTIFICACIONES SE TIENE POR HECHA DICHA NOTIFICACION POR MEDIO DE LISTA. DOY FE.

